

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio No. ____

Santiago de Cali, quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

PROCESO:	Ejecutivo
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2018-00974-00
DEMANDANTE:	Diego Hernán Bolaños González y otros notificacionesabogadoberon@hotmail.com , asalbogo@hotmail.com
DEMANDADO:	Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

Se tiene que la presente demanda, cuyo título ejecutivo lo constituye una conciliación judicial, obtenida en el trámite de apelación de una sentencia condenatoria a favor de los ejecutantes, conforme al inciso cuarto del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), fue repartida inicialmente al Juzgado Once Administrativo de Cali, siendo inadmitida mediante auto No. 502 de abril 10 de 2018, en razón a que una de las beneficiarias del pago de perjuicios, la señora Teresa de Jesús González Morales, falleció el 12 de mayo de 2013, requiriéndose la sucesión o liquidación de su sociedad conyugal con la adjudicación de la correspondiente partida, por lo cual, mediante escrito visto a folio 90, el apoderado de los accionantes desistió del reclamo de los perjuicios que correspondían a dicha demandante.

Posteriormente el juzgado administrativo en mención libró mandamiento de pago mediante auto No. 1103 de julio 11 de 2018, frente al cual el apoderado de la parte ejecutante presentó recurso de reposición, pues estimó que el mandamiento de pago se debió librar teniendo en cuenta el salario mínimo que regía para el año 2012 y no el fijado para 2011, pues según argumentó el apoderado de los actores, la sentencia quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 2012.

Encontrándose para resolver dicho recurso, el juzgado de conocimiento, mediante auto No. 1495 de agosto de 2018, y habida cuenta providencia de agosto 3 de 2019, proferida por esta Corporación, la cual acoge la decisión unificada de auto interlocutorio U 0-001-2016 de julio 29 de 2016, Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado que decidió sobre la competencia para conocer de las demandas ejecutivas, donde, teniendo en cuenta que el auto que aprobó la conciliación judicial quedó en firme en vigencia del Decreto 01 de 1984, es al Despacho que emitió dicha providencia a quien le corresponde el conocimiento de su ejecución, por lo cual se declaró sin



competencia para conocer de la presente y la remitió al Tribunal y en particular a este despacho.

II CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA

Si bien es cierto que el numeral 7 del artículo 152 del CPACA atribuye la competencia de la Corporación para conocer de procesos ejecutivos, en principio en razón de la cuantía, la Sala acoge el criterio de conexidad expuesto en providencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del consejero William Hernández Gómez dentro el expediente Al 0-001-16 y asume el presente asunto en primera instancia al haber esta Sala proferido la sentencia objeto de ejecución.

2.2. EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

La Ley 1437 de 2011, en su título IX, artículos 297 a 299 regula el proceso ejecutivo y define, para efectos de dicho compendio normativo, qué es lo que constituye título ejecutivo y el procedimiento para la ejecución de contratos y condenas impuestas a entidades públicas; no obstante, el CPACA no reglamenta en su integridad el proceso ejecutivo, razón por la que, conforme a la cláusula remisoria contenida en el artículo 306 ibídem, se debe dar aplicación a las normas del Código General del Proceso - CGP, para establecer si existe mérito para librar mandamiento de pago, frente a una obligación determinada.

El artículo 297 del CPACA define el título ejecutivo, así:

“Artículo 297. Título Ejecutivo. *Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible. (...)”

Por su parte, el artículo 422 del CGP señala:

“Artículo 422. *Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, **claras y exigibles** que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y de los demás documentos que señale la ley. (...)*”

Entre tanto, el artículo 430 ibídem, dispone:



“Artículo 430. *Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal (...)*”

De allí se colige que el presupuesto para ejercitar una acción ejecutiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, es decir que sea claro, expreso y exigible, de donde surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

2.3. PROCEDENCIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN

Por su parte, tenemos que la procedencia del recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento ejecutivo, se encuentra consagrado en el inciso 2° del artículo 430 del CGP, el cual establece:

"Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso."

Sobre la forma en que se interponen los recursos, el artículo 318 *Ibídem*, indica:

“Artículo 318. *Procedencia y Oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.”

En estos términos, conforme a las normas transcritas, tenemos que la procedencia del recurso interpuesto, no se encuentra en discusión alguna, ya que fue interpuesto dentro del término, tal como se observa en la constancia secretarial vista a folio 101.

2.4. CONSIDERACIÓN PREVIA

En cuanto a la declaratoria de falta de competencia el artículo 138 del CGP dispone:

“Artículo 138. *Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por*



el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.” (Subraya la Sala)

Así pues, teniendo en cuenta la norma anterior se deja en claro que Tribunal continuará con el proceso asumiéndolo en el estado que se encuentra, esto es, pendiente para resolver el recurso de reposición, quedando a salvo todo lo actuado hasta entonces por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali.

2.5. CASO CONCRETO

En el presente asunto el apoderado de los accionantes recurrió en reposición aduciendo que el despacho para liquidar el mandamiento de pago se basó en el salario mínimo del año 2011, cuando debió hacerlo con el salario mínimo correspondiente a 2012 pues fue en este año que acaeció la ejecutoria de la sentencia, y el auto que libró mandamiento fijó los siguientes montos por perjuicios morales de acuerdo al salario mínimo de 2011:

Nombre	Condena impuesta por concepto de Perjuicios Morales	Perjuicios morales conciliados (70% de la condena impuesta)	Equivalente en pesos
Diego Hernán Bolaños González (afectado)	100 SMMLV	70 SMMLV	\$37.492.000
Laura Marcela Bolaños Martínez (hija)	50 SMMLV	35 SMMLV	\$18.746.000
Zaida Martínez Marmolejo (esposa)	50 SMMLV	35 SMMLV	\$18.746.000
Alfonso Bolaños Díaz (padre)	30 SMMLV	21 SMMLV	\$11.247.600
Benhur Alfonso Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.498.400
Asdrúbal Alfonso Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.498.400
Euclides Alfonso Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.498.400
Fredy Alberto Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.498.400
Nidia Alcira Bolaños González (hermana)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.498.400

Teniendo en cuenta lo anterior pide reformar parcialmente el auto en su numeral 1.1. y que se libre el mandamiento de pago con base en el salario mínimo del año 2012, es decir (\$566.700) pues la ejecutoria de la sentencia fue el 29 de agosto de dicho año.

Expuesta la inconformidad del recurso, esta Corporación de acuerdo con el artículo 297 del CPACA y por remisión del artículo 306 ibídem, a los artículos 422 y 433 del CGP, procederá a reponer el auto No. 1103 de julio 11 de 2018, en razón a que la ejecutoria



del título ejecutivo en el presente proceso se produjo el 28 de agosto de 2012 como se observa a folio 44 y vuelto.

Ello en razón a que si bien hubo sentencia de primera instancia el 23 de septiembre de 2011 (folios 6 a 30), la cual, en el numeral tercero de su resolutive expuso que las sumas reconocidas serían liquidadas de acuerdo con el salario mínimo que rigiera a la fecha de su ejecutoria, dicha sentencia fue apelada y en la audiencia de conciliación de julio 4 de 2012 (folios 33-37)¹, la Fiscalía General de la Nación presentó propuesta de conciliación, la cual fue aceptada por la parte actora y aprobada por el Tribunal mediante auto de agosto 17 de 2012 (folios 39-44).

De manera que la mencionada sentencia no llegó a quedar ejecutoriada, pero sí el auto que aprobó la conciliación, hecho que ocurrió, como se dijo arriba, el 28 de agosto de 2012, por lo cual se procederá a reponer el auto que libró mandamiento de pago, con la liquidación de acuerdo al salario mínimo del año 2012, reiterándose que fue en dicho año que acaeció la ejecutoria del título a ejecutar, y quedando entonces la correspondiente operación aritmética de la siguiente manera:

Nombre	Condena impuesta por concepto de Perjuicios Morales	Perjuicios morales conciliados (70% de la condena impuesta)	Equivalente en pesos
Diego Hernán Bolaños González (afectado)	100 SMMLV	70 SMMLV	\$39.669.000
Laura Marcela Bolaños Martínez (hija)	50 SMMLV	35 SMMLV	\$19.834.500
Zaida Martínez Marmolejo (esposa)	50 SMMLV	35 SMMLV	\$19.834.500
Alfonso Bolaños Díaz (padre)	30 SMMLV	21 SMMLV	\$11.900.700
Benhur Alfonso Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.933.800
Asdrúbal Alfonso Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.933.800
Euclides Alfonso Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.933.800
Fredy Alberto Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.933.800
Nidia Alcira Bolaños González (hermano)	20 SMMLV	14 SMMLV	\$7.933.800

Por último, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, las notificaciones se someterán a dicha norma, debiéndose notificar el auto que libra mandamiento de pago junto con el que repone y ordena modificar, es decir el presente.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

RESUELVE:

¹ Audiencia de conciliación entonces obligatoria en virtud del inciso cuarto del artículo 192 del CPACA.



PRIMERO. ASUMIR el conocimiento de la presente acción ejecutiva.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral **1.1.**, del auto No. 1103 de julio 11 de 2018, por las razones expuestas, el cual quedara de la siguiente manera:

“1.1 Por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS (130.907.700), por concepto de perjuicios morales.”

En lo demás el auto No. 1103 de julio 11 de 2018, queda incólume.

TERCERO. Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

CUARTO. ORDENAR a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del CGP, deberá pagar las anteriores sumas a la parte ejecutante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.

QUINTO. NOTIFICAR este auto a la parte ejecutante en la forma prevista en el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente proveído y el auto No. 1103 de julio 11 de 2018 proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali a la entidad ejecutada Nación – Fiscalía General de la Nación, adjuntando copia de la demanda y los anexos a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 2080 del 2021 y con ello no será necesario remitirlos por medio físico.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA
Magistrado